

Tulio Halperín Donghi

Una encrucijada decisiva y su herencia: Latinoamérica desde 1960

La década de las decisiones (1960-1970)

Como ya se ha subrayado, sobraban razones para que la década que iba a abrirse en 1960 se anunciase como una de decisiones radicales para América Latina. Las dos más importantes se han señalado también: ese hecho nuevo e imprevisible que era el giro socialista de la Revolución cubana vino a incidir en un subcontinente que descubría agotada la línea de avance tomada a tientas durante la depresión y la segunda guerra, y comenzaba a adivinar que se estaba aproximando a otra de las difíciles encrucijadas que habían puntuado su breve historia. No iban a ser ésas sin embargo las únicas razones por las cuales tantos estaban dispuestos a profetizar en 1960 que se aproximaba una etapa en que no podrían ya posponerse las opciones que decidirían el destino futuro de América latina. Junto con ellas hacía sentir sus consecuencias el vigor inesperado del crecimiento económico, tanto en lo que comenzaba a llamarse el primer mundo como en el bloque socialista, que –a la vez que inspiraba un activismo nuevo en las potencias que desde uno y otro gravitaban sobre el subcontinente– acentuaba en éste la desazón al descubrir que en medio de esa ola expansiva cada vez más impetuosa su propio ritmo de avance estaba lejos de acelerarse.

No por eso iba a cesar del todo la búsqueda de nuevas estrategias orientadas a prolongar hacia el futuro un avance que aparecía agotado en sus posibilidades; la superación del marco nacional parecía ofrecer un camino, y de 1960 data la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y la del Mercado Común Centroamericano. Pero, mientras el segundo alcanzó un impacto considerable antes de ver frenados sus progresos, la primera (que abarcaba a todos los países mayores y casi todos los restantes de subcontinente) luego de un temprano acuerdo sobre una primera lista de artículos desgravados, que esquivaba cuidadosamente afectar el monopolio interno de ninguno de los sectores productivos importantes en cada uno de los países miembros, fracasaría en todos los intentos de ampliarlas; a la vez se hacía cada vez más claro que luego del agotamiento del desarrollismo las uniones económicas estaban destinadas a ser instrumentadas por esos participantes cada vez más influyentes en las economías latinoamericanas que eran las empresas multinacionales, a las que venían a facilitar sus complicadas estrategias de organización y distribución de mercados; el bloque bolivariano, que comprendía a más de los países herederos de la Gran Colombia a los andinos, y que, surgido más tardíamente, buscó limitar el influjo de esos nuevos protagonistas de la vida económica, tampoco logró ir en cuanto a ello demasiado lejos.

Pero cabe dudar de que durante la década abierta en 1960 el problema más serio que debían afrontar las economías latinoamericanas fuese el avance tan denunciado de las multinacionales; salvo en México, donde ese avance había comenzado ya desde principios de la década anterior, y constituía en verdad uno de los aspectos básicos del “desarrollo estabilizador”, el problema era cabalmente el opuesto: por razones que sólo en parte se vinculaban con la prudencia que inspiraban a los inversores los anuncios de inminente crisis sociopolítica pregonados desde todos los tejados, ese avance era demasiado lento y parcial para incorporar más sólidamente (y así fuese el costo muy alto

que los adversarios de esas empresas no se fatigaban de denunciar) a Latinoamérica en ese orden capitalista en vertiginoso ascenso.

Aunque el descubrimiento de que Latinoamérica hallaba difícil alcanzar el ritmo cada vez más acelerado de esa ola expansiva no era del todo nuevo, sólo luego del fracaso del desarrollismo vino a colocarse en el centro de la problemática latinoamericana; a lo largo de la década que se abría iba a parecer cada vez más claro a muchos que sería imposible superar la amenaza de estancamiento sin quebrar el marco del sistema político y económico internacional en que hasta entonces había debido desenvolverse Latinoamérica.

Esa convicción vino a dar popularidad a las distintas versiones de la llamada teoría de la dependencia, que partían de un diagnóstico no demasiado alejado del de Prebisch y, aunque no se privaban de reprochar al economista argentino que no lo hubiese acompañado de una precisa propuesta de soluciones económicas para los males registrados en ese diagnóstico, también se abstenían de adelantarla. Es que, a los ojos de los teóricos de la dependencia, lo que impedía a Latinoamérica superar el subdesarrollo era su integración subordinada en el orden capitalista mundial, y –aunque no todos los proponentes de esa teoría veían en la revolución socialista la única vía hacia adelante– todos coincidían en que era preciso introducir en ese orden modificaciones más hondas que los retoques hasta entonces invocados como necesarios por las corrientes reformistas latinoamericanas; a sus ojos, si los problemas eran económicos, su solución sólo podía ser política.

De este modo la reacción latinoamericana frente al estancamiento en que amenazaba hundirse el subcontinente venía a reforzar las que la Revolución cubana estaban suscitando entre quienes desde fuera aspiraban a orientar el rumbo de éste. En lo que tocaba a éstos últimos, el vigor que la ola de prosperidad había infundido a las economías y sociedades desde las cuales se disponían a orientar ese curso los animaba a hacer pesar con mayor firmeza que nunca su influjo sobre el desorientado subcontinente; cuando en Washington o en Moscú se afirmaba con tanta seguridad que éste estaba entrando en una etapa decisiva, se quería decir entre otras cosas que quienes formulaban esa profecía se juzgaban capaces de hacer lo necesario para que así ocurriese.

El activismo menos cauteloso que así irrumpía en la política latinoamericana de los Estados Unidos tanto como en la de la Unión Soviética reflejaba por otra parte el que ahora avanzaba en todas partes, bajo el estímulo de un clima político, social y económico que parecía estar expandiendo cada día los límites de lo posible. Mientras aun la Iglesia católica, que –para usar la expresión desolada de uno de sus hijos– por más de un siglo se había resignado a no vivir para no morir, en el Concilio Vaticano II se decidía por fin a afrontar, así fuese con ánimo trepidante, los dilemas que durante esa larga etapa había juzgado prudente soslayar, los poderes terrenos se disponían a plasmar el futuro con una audacia menos atemperada por la prudencia. Así ocurría en los Estados Unidos, donde el presidente Johnson anunciaba la construcción de la *Great Society*, que utilizaría la creciente prosperidad para eliminar la penuria para todos los norteamericanos, y también en la URSS, donde Jruschov proclamaba próximo el momento de comenzar la transición al comunismo, basada también ella en el enorme avance de las fuerzas productivas durante la etapa que estaba llegando a su consumación.

Pero esa confianza nueva que ahora dominaba a los agentes externos que de veras contaban en Latinoamérica (los Estados Unidos, que habían dejado atrás a sus tradicionales rivales europeos, y esa presencia advenediza que era la URSS) iba más allá de estimular su activismo; también orientaba a éste hacia objetivos no sólo más ambiciosos sino parcialmente distintos que en el pasado. Así ocurría desde luego en

cuanto a la URSS, no sólo porque su decisión de patrocinar el desafío cubano a la potencia hegemónica contrastaba con la cautela que había caracterizado anteriormente sus movimientos en el tablero latinoamericano, sino porque a la redefinición más ambiciosa de sus objetivos político-diplomáticos en ese remoto teatro venía a sumarse la aquiescencia otorgada al rumbo inequívocamente socialista tomado por la revolución cubana, que reflejaba la convicción de que el nuevo dinamismo adquirido por el proceso socioeconómico a escala planetaria estaba haciendo obsoletas las lecciones de prudencia deducidas por la Tercera Internacional del desastroso desenlace de las revoluciones que en la entreguerra había buscado patrocinar desde Hungría y Alemania hasta China.

Desde el mismo modo en cuanto a los Estados Unidos. Sin duda su disposición a gravitar más decididamente en Latinoamérica quedaba suficientemente explicada por el desafío cubano, y el patrocinio soviético que aseguró a éste la supervivencia, pero ellos no justificaban por sí solos el rumbo que la administración Kennedy quiso dar a esa política más activa. Ésta –aseguraba el joven presidente, que en su campaña había acusado a su predecesor Eisenhower de haberse limitado a responder de modo cada vez más rutinario a los sucesivos desafíos soviéticos, terminando por entregar totalmente la iniciativa a la potencia rival– no podía tener como objetivo central el demasiado limitado de restaurar la hegemonía norteamericana sobre Cuba y sí en cambio el de promover y orientar una transformación de las estructuras sociopolíticas latinoamericanas que las hiciese invulnerables a la tentación revolucionaria que había ganado a la Gran Antilla.

El teatro principal del combate contra la amenaza revolucionaria se trasladaba así al continente, y a él estaban orientadas las innovaciones propuestas por la administración de Kennedy, que se inspiraban por una parte en una implícita teoría general sobre las precondiciones necesarias de procesos revolucionarios, y por otra en las lecciones ofrecidas por los procesos de cambio socioeconómicos desencadenados en Asia y África a partir de la segunda guerra mundial, que, puesto que habían tomado algunos casos vías revolucionarias y en otros no, parecían ofrecer enseñanzas útiles sobre cómo esquivar las primeras y alcanzar transitando las segundas transformaciones menos incompletas que las que hasta entonces había conocido Latinoamérica.

La teoría general había sido imperiosamente esbozada en un afortunado folleto del profesor W. W. Rostov, asesor del nuevo presidente; su “manifiesto no comunista” titulado *Las etapas del desarrollo económico* hacía del desarrollo autosostenido alcanzado por las sociedades industriales maduras algo más que la meta a la cual se encaminaban todas las restantes: él era en verdad el punto de llegada de todo el proceso histórico, y de superación de las contradicciones que habían tornado a veces tan tormentoso el avance hacia esa cima final. La moraleja latinoamericana de esa visión de la historia universal era que el riesgo de revolución cesaría cuando el subcontinente alcanzaría por fin ese desarrollo autosostenido, y que era por lo tanto urgente impulsarlo en ese sentido, pero también que durante la acelerada transición que ello imponía el peligro revolucionario sería más agudo que nunca.

Las experiencias acumuladas desde Argelia hasta el Lejano Oriente agregaban precisión a esas sugerencias demasiado generales. Así por ejemplo, la eficacia con que la reforma agraria introducida en Japón, Corea del Sur y Formosa había contribuido a atenuar tensiones sociales y a remover obstáculos al crecimiento económico incitaba a afrontar con mayor audacia que en el pasado las tareas de ingeniería social requeridas para alcanzar los mismos objetivos en Latinoamérica; a la vez, los múltiples ejemplos de resistencia al desafío revolucionario –exitosa en algunos casos, como en Malasia y las Filipinas, infortunada en otros, como en China y Vietnam del Norte– sugerían como tarea aún más urgente la de crear sólidos encuadramientos políticos y sociales para las masas

de cuyo arbitraje dependía en último término el desenlace del conflicto con las fuerzas revolucionarias.

Expresión de esta nueva política latinoamericana fue la Alianza para el Progreso, cuyas propuestas (que retomaban otras de origen latinoamericano, a partir de la Operación Panamericana lanzada por el presidente brasileño Kubitschek y la aún más grandiosa propuesta por Fidel Castro) ponían en primer plano los aspectos de esa nueva línea que podían resultar más gratos a la opinión latinoamericana. Ella propugnaba a la vez el recurso a la reforma agraria, cada vez que –como ocurría en casi toda Latinoamérica– éste se revelaba necesario para romper el estancamiento rural, y una industrialización más rápida y menos limitada que en el pasado; esos objetivos debían lograrse mediante la transferencia de veinte mil millones de dólares a lo largo de diez años, la mitad de los cuales provendría del tesoro de los Estados Unidos y el resto de inversiones productivas privadas, y que debía ser complementada por inversiones de igual monto y de origen latinoamericano, aquí a cargo sobre todo del Estado; el objetivo era asegurar una tasa de crecimiento del producto bruto *per cápita* del orden del 2,5 por 100 anual.

Ello requería además la expansión de las funciones y los recursos del Estado, que figuraban también entre los objetivos declarados de la Alianza; ésta preveía en efecto una reforma impositiva que aumentase y redistribuyese la carga fiscal, complementada por un sistema de percepción más eficaz, y capaz por lo tanto de hacer pagar su parte a los más ricos. Pero la creación de una base financiera más robusta para el Estado no tenía tan sólo por objetivo facilitar el desarrollo económico y contribuir a una transformación de la sociedad en sentido más igualitario; servía a la vez a ese otro objetivo menos insistentemente pregonado de la nueva política latinoamericana de los Estados Unidos que era la consolidación acelerada de estructuras políticas y sociales capaces de encuadrar sólidamente a las masas; si los nuevos dirigentes de Washington advertían muy bien que un estado capaz de hacerse presente de modo decisivo en todas las esferas de la vida colectiva no era suficiente para asegurar ese encuadramiento, no se equivocaban al considerar que su ausencia lo hacía extremadamente difícil.

Para esa tarea de encuadramiento y canalización de las masas latinoamericanas el gobierno de Kennedy confiaba en las corrientes de reforma moderada cuya fidelidad a la posición norteamericana en la guerra fría no había vacilado ni aun ante la sistemática ingratitud del de Eisenhower, y esa confianza se traducía en la preferencia por las soluciones políticas encuadradas en el marco de la democracia representativa, frente a las dictatoriales, que sin duda era exhibida con particular insistencia en función de la nunca extinguida polémica anticubana, pero que se apoyaba sobre todo en la convicción de que los partidos de masas, tanto en un marco de democracia competitiva como en uno de monopolio político de hecho si no de derecho, podían cumplir mejor esa función de control que el autoritarismo de base militar.

Al mismo tiempo los Estados Unidos no renunciaban a poner a los ejércitos latinoamericanos al servicio de ese ambicioso programa de transformación con propósitos de conservación. Una parte considerable de los fondos dirigidos a Latinoamérica se orientaron hacia esos ejércitos, que a la vez eran incitados a tomar a su cargo, a través de los llamados programas de acción cívica, funciones de desarrollo económico-social que los introdujesen en el horizonte de experiencias cotidianas de las masas rurales, y las incitaran a volverse hacia ellos en busca de orientación en momentos de crisis, supliendo así la insuficiente implantación de otras ramas del Estado y la de los partidos en esos rincones inhóspitos en cualquiera de los cuales podía realizarse la amenazante promesa cubana de hacer de la cordillera de los Andes una Sierra Maestra a escala continental.

Aunque la Alianza para el Progreso había marginado a los organismos panamericanos, Washington no había renunciado aun a utilizarlos en otros contextos. Pero las reticencias cada vez mayores que las propuestas norteamericanas encontraban en el seno de la OEA, que culminaron en 1965, cuando el proyecto de creación de una fuerza militar panamericana de carácter permanente no reunió los votos de los dos tercios de los países miembros que requería para ser aprobado en la conferencia de Río de Janeiro, impulsarían cada vez más a Washington a prescindir de ese instrumento antes central a su política latinoamericana.

También por este motivo la preferencia por los acuerdos bilaterales, insinuada ya en la estructuración de la Alianza, vino a acentuarse cada vez más. En ese marco bilateral, los contactos, no sólo de Estado a Estado, sino entre específicas ramas de la administración y aun entre organizaciones extra-estatales, van a multiplicarse y tornarse más íntimos. Así, mientras la reestructuración de las fuerzas armadas latinoamericanas, sostenida por fondos norteamericanos, cuenta con el asesoramiento de las de los Estados Unidos, las organizaciones sindicales norteamericanas, políticamente más cercanas a la administración de Kennedy que a su predecesora, amplían también ellas sus funciones de asesoramiento de sindicatos latinoamericanos dispuestos a recibirlos, y canalizan hacia éstos fondos de promoción social incluidos a menudo en el presupuesto de la Alianza, cuyos beneficios se espera que les atraigan el favor de sectores más amplios de la clase obrera, ganados así indirectamente a la opción pronorteamericana. Del mismo modo, fondos de ese origen servirán para consolidar la clientela de políticos dispuestos a alinearse en sentido favorable a la política latinoamericana de los Estados Unidos; así Carlos Lacerda, el vocero periodístico de la derecha brasileña, transformado en gobernador de Guanabara (el estado creado en el territorio de la antigua capital, Río de Janeiro), puede consolidar su base popular gracias a un programa de viviendas sostenido por el aporte norteamericano, y en el Perú, el gobierno de convivencia aprista-oligárquica cuenta con fondos del mismo origen para desarrollar un programa análogo en Lima.

Todo ello tiene por resultado la implantación de una presencia norteamericana más compleja y diferenciada, y por eso mismo más capaz de gravitar eficazmente en una Latinoamérica que está entrando tumultuosamente en la era de masas. Esa presencia debe servir –se ha indicado ya– a un doble propósito de transformación y conservación, o –para decirlo con una fórmula que se hará pronto más popular en Latinoamérica que en los Estados Unidos– de seguridad y desarrollo. Esas dos fórmulas ignoran por igual que en los momentos críticos, que no han de faltar en esos años de honda y confusa transformación política, no iba a ser siempre fácil hallar un camino que satisficiera por igual ambas aspiraciones; como era esperable, cada vez que una emergencia imponía optar entre ellas, la preferencia iba a lo más urgente, y en cada uno de esos momentos decisivos venía a confirmarse que la conservación (o si se prefiere la seguridad) tenía prioridad sobre el objetivo de largo plazo que era el desarrollo económico y más aún sobre el de transformación sociopolítica, que en cada una de esas crisis se revelaba con creciente claridad como un arma de doble filo.

Luego del asesinato de Kennedy, y bajo la égida de su sucesor Lyndon Johnson, la primacía del objetivo de conservación y seguridad quedó consagrada por el abandono de la opción política a favor de la democracia representativa: en América latina, aseguraba el secretario de Asuntos Latinoamericanos, Thomas Mann, los Estados Unidos volvían, como en el pasado, a ser simplemente amigos de sus amigos, sin imponerles fastidiosas exigencias de decoro institucional. Pero ya antes de esa reorientación programática de la política norteamericana, la administración de Kennedy había debido resignarse a encarar más de una de las crisis latinoamericanas olvidando su preferencia por la democracia representativa. Así ocurrió por ejemplo en Perú, cuando Haya de la Torre, para entonces

el más fiel aliado de la política norteamericana en su país y Latinoamérica, obtuvo en las elecciones de 1962, en que se postuló como candidato oficialista a la sucesión del presidente Prado, una victoria tan estrecha y tan discutible que el golpe militar que le cerró el acceso al poder fue recibido con beneplácito por la mayor parte de la opinión pública; esa experiencia parecía mostrar que el favor norteamericano no era suficiente para asegurar la fortuna electoral de los partidos de masas dispuestos a servir a su política, y el gobierno de Washington –luego de expresar su mal humor ante el espíritu demasiado independiente de la fuerza armada peruana a través del retiro temporario de su representante en Lima– terminó por inclinarse ante el hecho consumado.

A partir de 1963 los titubeos y perplejidades quedaban atrás; en 1964 el golpe militar que derrocó al presidente brasileño Goulart fue organizado en íntimo contacto con la representación norteamericana en ese país, que por su parte se comprometió a otorgarle apoyo militar activo, si un éxito inmediato no lo hacía innecesario; en la República Dominicana al año siguiente una revolución militar contra los oficiales que en 1963 habían derrocado al presidente constitucional Juan Bosch, que logró hacerse fuerte en la capital, fue interpretada por Washington como una tentativa de crear otra cabeza de puente antillana para la revolución socialista, y provocó una intervención militar unilateral, transformada luego en mediación armada sostenida por una fuerza nominalmente panamericana colocada bajo el comando de un general brasileño; la elección de un nuevo gobierno constitucional que pudo así imponerse como alternativa a la restauración del derrocado en 1963 fue, mucho más plenamente que el éxito del golpe militar brasileño, resultado de una decisión de Washington, que se resolvió en la ocasión a desplegar a la luz del día su abrumadora superioridad militar.

Los críticos que invocando este episodio denunciaban la nueva política de los Estados Unidos como un mero retorno a los usos que precedieron la introducción de la política de Buena Vecindad perdían de vista quizá lo esencial de la nueva situación. Sin duda, la Revolución cubana, al devolver al primer plano del debate político latinoamericano el tema del imperialismo, vivificaba eficazmente en la opinión pública sentimientos que habían venido adormeciéndose desde 1933, y que ni la prédica de inspiración soviética ni el retorno del intervencionismo norteamericano que había comenzado ya a insinuarse bajo el estímulo de la guerra fría habían logrado hasta entonces movilizar.

Pero a los efectos de este remozamiento del antiimperialismo latinoamericano venían a contraponerse los del realineamiento que suscitaba en la opinión latinoamericana la aparición de la alternativa socialista en la más inmediata agenda política del subcontinente, que era también ella consecuencia de la Revolución cubana, y que favorecía la creación de una solidaridad nueva entre los Estados Unidos y todos los que en Latinoamérica rechazaban alarmados esa alternativa. Gracias a ello el nuevo intervencionismo norteamericano estuvo lejos de evocar en el área afectada una oposición tan unánime como a comienzos del siglo; no sólo era recibido con abierto beneplácito por fuerzas conservadoras algunas de las cuales le había sido tradicionalmente hostiles, sino –salvo en algunos episodios que se iban a revelar atípicos, como precisamente el dominicano– no iba a necesitar volcarse en nuevas acciones militares, ya que hallaría instrumentos suficientemente eficaces en esos aliados que la común hostilidad al socialismo había venido a depararle.

Entre éstos, los ejércitos latinoamericanos tenían un papel cada vez más central desde la perspectiva norteamericana: la consolidación del aparato estatal, que estaba ya entre los objetivos de la Alianza para el Progreso, tendía a revolverse cada vez más en la de las fuerzas armadas, que recibían una parte creciente de los fondos públicos norteamericanos destinados a Latinoamérica, y en parte gracias a ello gravitaban con peso creciente en la vida de la región. Pero ese vínculo cada vez más íntimo iba más allá

de agregar solidez y eficacia al poderío estrictamente militar de esos ejércitos (aunque ya en este aspecto su contribución, decisiva para el uruguayo, que había llegado a tener existencia sólo nominal como fuerza de combate, o el boliviano que había sobrevivido a duras penas a la derrota sufrida a manos de los combatientes urbanos y mineros de la victoriosa revolución de 1952, se reveló más que considerable en la mayor parte de los países pequeños y aun en los mayores estuvo lejos de ser insignificante).

Más importante era, sin embargo, que esos nuevos lazos crearan una halagadora intimidad con el cuerpo de oficiales del más poderoso ejército del planeta, en términos que sus pares del sur del Río Bravo se lisonjearan en creer igualitarios, y que ella sirviese de vehículo para la difusión de una propuesta acerca de las tareas futuras de los ejércitos latinoamericanos que iba a encontrar aceptación efusiva en éstos. Sin duda desde fines del siglo XIX más de uno de esos ejércitos había reivindicado un papel central en el proceso de modernización y consolidación de la sociedad dirigido por el Estado, por ejemplo utilizando el enrolamiento universal para expandir el alfabetismo hacia capas de población que ese otro instrumento de transformación social que era la escuela no había logrado alcanzar, pero contribuciones como ésta se integraban mal con su específica función militar, y en cuanto a ésta la profesionalización orientada por instructores ultramarinos, que los estaba haciendo idóneos para trazar según las reglas el arte planes de guerra fronterizas que (era cada vez más evidente) nunca iban a desencadenarse, no resolvía el problema de la función del ejército en un país modernizado de modo halagador para el orgullo colectivo del cuerpo de oficiales, que se resistía mal a la tentación de volcar sus frustradas energías en la política interna.

Ahora la doctrina de la seguridad nacional, versión militar de la seguridad y desarrollo, hacía del ejército el protagonista de la vida nacional, al ponerlo al frente de una empresa que unificaba la guerra convencional y la política convencional y a la vez las elevaba a un plano más alto, al poner a ambas al servicio de una heroica militancia en el conflicto mundial, del que esa doctrina ofrecía una imagen decididamente apocalíptica, y cuya presencia decisiva proclamaba descubrir detrás de los tan numerosos y a primera vista tan heterogéneos que desgarraban a Latinoamérica.

Sin duda, en la determinación de los contenidos específicos de esa doctrina no sólo influía decisivamente la circunstancia latinoamericana, sino también el ejemplo de otros ejércitos en que los latinoamericanos habían buscado modelos en el pasado, y en particular del francés, que a lo largo de su infructuosa resistencia a los movimientos nacionales de Indochina y Argelia había elaborado rebuscadas justificaciones ideológicas para su acción y luego para su derrota, a la vez que una compleja casuística destinada a darle orientación moral frente a las nuevas tareas que ese inédito tipo de lucha le imponía.

Ese ejemplo no sólo aparecía más relevante porque hundía sus raíces en una tradición que los latinoamericanos sentían espontáneamente más afín que la norteamericana (en el marco de la cual por ejemplo el asesoramiento eclesiástico era decisivo para disipar escrúpulos frente al uso del terror y la tortura, lo que hubiera sido impensable en el ejército de los Estados Unidos), pero también porque esa tradición aparecía corroída por dudas acerca de su propia validez, ausentes en el Norte pero cada vez más vivaces también en América latina, que se reflejaban por ejemplo en la fascinación apenas disimulada por el modelo alternativo que ofrecía el enemigo, que en Francia contribuyó a hacer de Mao el Clausewitz de la guerra contrarrevolucionaria, y en Latinoamérica iba a tener consecuencias igualmente desconcertantes. A la vez esa fascinación era la contracara de un horror al adversario sólo compartido con la misma intensidad en los Estados Unidos por una relativamente estrecha franja excéntrica de la opinión pública; mientras en Francia ese horror tan intenso daba expresión a la rencorosa amargura de comunidades que se sabían condenadas por el avance inexorable de la descolonización,

esa amargura encontraba eco puntual en la de todos los que en América latina temían verse aplastados por una ola revolucionaria que, aunque preferían no confesarlo, estaban cerca de creer irrefrenable.

Pero si los contenidos concretos de la doctrina de seguridad nacional, y más aun en el complejo de pasiones y sentimientos que encontraban expresión en ella, el ejemplo que venía del norte pesaba menos de lo esperable, la nueva intimidad entre las fuerzas armadas latinoamericanas y las de la potencia hegemónica fue con todo decisiva para acelerar la transición entre una concepción de las tareas militares que había guiado durante décadas a los ejércitos latinoamericanos y otra que, a la vez que le fijaba funciones nuevas y más vastas, les imponía modos de conducta que en el pasado hubiesen parecido incompatibles con la dignidad del oficial; así, si no puede afirmarse más allá de toda duda que los cursos de perfeccionamiento ofrecidos por distintas agencias de inteligencia norteamericanas hayan incluido clases teórico-prácticas en el arte de la tortura, tal como alegaban frecuentemente sus críticos (los defensores de esos cursos sostenían, como es sabido, que uno de sus objetivos era ofrecer alternativas al uso indiscriminado de la tortura, y en todo caso la conclusión de que el empleo de ésta era en Latinoamérica una innovación importada del norte, era insostenible), la transformación en legítimo tema de discusión de lo que había sido hasta entonces un secreto nunca confesado era suficiente para facilitar la inclusión de la tortura y otros modos de ejercicio del terror contra poblaciones civiles entre las tareas exigibles de los integrantes del cuerpo de oficiales, aunque las justificaciones ideológicas y morales para semejantes actividades se buscasen en fuentes menos exóticas que las norteamericanas.

Otra consecuencia decisiva iba a tener esta reestructuración de los ejércitos latinoamericanos bajo auspicios norteamericanos: ésta profundizaba la transformación de cada uno de esos ejércitos en un organismo cada vez más consciente de su identidad y sus intereses corporativos, tanto en el plano interno como en el internacional. En lo que se refiere a éste los integrantes de cada uno de esos ejércitos parecían encontrar ahora interlocutores más cercanos en sus camaradas de los demás que en los integrantes de otras ramas del Estado del que teóricamente cada uno de esos ejércitos seguía siendo una dependencia. La rapidez del cambio se percibe muy bien cuando se considera que ya en 1964 el general Onganía, comandante en jefe del ejército argentino, iba a hallar perfectamente adecuado anunciar a su país y al mundo la actitud de ese ejército frente a las autoridades constitucionales (que estaba lejos por cierto de ser de obediencia ciega) en un discurso pronunciado en West Point ante la quinta conferencia de ejércitos americanos.

En el marco nacional la consolidación de una conciencia corporativa en el cuerpo de oficiales sumaba sus efectos a los de la burocratización de la institución para transformar radicalmente el modo de inserción de las fuerzas armadas en la vida política. Mientras en el pasado éstas habían ingresado en ella como séquito y sostén de un dirigente surgido de sus propias filas, que gracias al apoyo complementario de corrientes políticas o fuerzas socioeconómicas reclutadas desde el poder o en el camino hacia él conservaba un notable poder de iniciativa, ahora ese ingreso iba a ser a menudo también él una empresa corporativa, cuyo titular era tan sólo un agente escasamente autónomo, y siempre revocable, de la institución que lo colocaba al frente de ella.

Pero esa transformación del carácter mismo de la intervención militar sólo en parte se explica por la que estaba sufriendo la institución militar misma; ésta refleja además la del temple de aquellos sectores latinoamericanos que ven aproximarse la etapa de decisiones abierta por la Revolución cubana con más alarma que esperanza. Es en efecto la conciencia de la gravedad de la coyuntura la que fortifica la decisión de mantener al titular militar de la gestión política bajo constante vigilancia corporativa; pero sus efectos van por

otra parte mucho más allá, en cuanto ella dicta los términos mismos en que esa gestión será encarada.

Sin duda esa conciencia encuentra eco –tal como se ha recordado una y otra vez– en las vastas capas sociales que se sienten también amenazadas por la inminente ofensiva revolucionaria, y que son quizá aún más sensibles que la dirigencia militar a las amenazas más insidiosas que derivan del agotamiento de desarrollismo. No se sigue de ello, sin embargo, que el temple sombrío con que la institución militar contemplaba el futuro dominara con igual fuerza a los grupos sociales amenazados por la ola revolucionaria. La aprensión con que éstos veían acercarse el momento decisivo de la vasta crisis sociopolítica en curso no les impedía entregarse –junto con los que debían transformarse en sus mortales adversarios en esa crisis inminente– a las sugerencias del optimismo sistemático con que el mundo desarrollado contemplaba el futuro; la misma década que se presenta en el plano político como de durísimas opciones está marcada por una apertura confiada y sorprendentemente poco polémica a innovaciones de estilo y sustancia en la vida colectiva, que –aunque corroen las bases morales del orden vigente en el momento mismo en que éste debe prepararse a afrontar un desafío mortal– son adoptadas con el mismo entusiasmo por los privilegiados por ese orden como por los que, sobre todo en las clases medias y medias bajas, se movilizan en su contra.

Para estos últimos tales innovaciones (que, como ha subrayado en una página elocuente el chileno Antonio Skármeta, ya proviniesen de progresos en las comunicaciones, desde el *moto-scooter* hasta el avión y el teléfono de larga distancia, o en la biología, tal la píldora anticonceptiva, tenían por consecuencia la apertura súbita de nuevas áreas de libertad para trayectorias vitales encerradas hasta entonces en carriles asfixiantemente estrechos) eran un anticipo de la revolución destinada a coronar todos esos avances; y ello hacía que la expectativa revolucionaria inspirase en ellos a menudo un ánimo menos militante que anticipadamente celebratorio. Más sorprendente era que los sectores amenazados por esa revolución tan anunciada compartiesen en tantos aspectos el espíritu festivamente iconoclasta de los celebrantes de su futura ruina; todavía en 1973 el sociólogo francés Alain Touraine iba a descubrir durante la agonía de la vía chilena al socialismo, y en el asediado reducto de las clases privilegiadas que era por entonces el Barrio Alto de Santiago, la supervivencia del hedonismo liberador de la década anterior, cuyos rituales seguían celebrándose en locales presididos por los iconos de la contractura...

Ese optimismo surgido de una circunstancia que no era la latinoamericana no hubiera con todo podido afirmarse si el agotamiento de las soluciones de las que Latinoamérica había vivido desde 1945 se hubiese traducido en algo peor que una tendencia al estancamiento o al desarrollo irregular y errático. En este punto es de temer que el recuerdo colectivo exagere los rasgos negativos de una etapa que vino a decepcionar tanto las esperanzas de rápida mejora económica como las de cambios sociales radicales, pero que, en términos de realidades más bien que de expectativas, estuvo marcada por un ritmo de crecimiento sin duda desigual, pero aun así casi siempre considerable. Ello hizo posible que el descontento derivado de la distancia creciente entre los avances de la economía y del bienestar en los países centrales y en la periferia latinoamericana se conjugase con una confianza en el futuro que, aunque no se lo admitiese, derivaba de los cambios exaltantes que a pesar de todo se estaban dando en las pautas de vida de sectores muy amplios de la sociedad latinoamericana, para hacer que la crisis resolutive por todos anunciada fuese esperada por quienes la favorecían con una impaciencia no refrenada por ningún profético anticipo de la dureza de los tiempos que se avecinaban, pero también que si inminencia no bastase para acendrar la militancia de los sectores privilegiados por el orden establecido.

Esta circunstancia no era la única que vino a fortificar la tendencia del ejército a verse a sí mismo como el solitario centinela de un frente de combate que ya nadie defendía en una sociedad atacada al parecer de frivolidad irredimible (y le inspiró una suerte de global hostilidad contra ésta que iba a encontrar desahogo en las salvajes oleadas represivas desencadenadas a partir del final de la década); la reforzaba todavía la modificación del clima vigente en la Iglesia católica, que a los ojos de muchos defensores del orden establecido la hacía aparecer cometiendo defección en la hora decisiva; por más de una década la llamada Teología de la Liberación, de séquito sin duda minoritario en el clero y los fieles, pudo ser vista como la punta extrema de una reorientación que, de modo más atenuado, encontraba en cambio eco en sectores muy amplios de las iglesias hispanoamericanas. Esa reorientación respondía a estímulos muy variados y en parte contradictorios, que se tornaron súbitamente más eficaces en el clima creado por el Concilio Vaticano II, pero si en un primer momento la renovación litúrgica, la actualización de los contenidos científicos e ideológicos y de los métodos pedagógicos en las instituciones católicas de enseñanza, la ampliación del papel de la comunidad de fieles en la vida eclesiástica, y la que iba a llamarse opción prioritaria por los pobres se presentaban como otras tantas dimensiones en la renovación global de un catolicismo latinoamericano hasta entonces aun menos agitado por cualquier veleidad innovadora que los de otras áreas, paulatinamente esta última se constituyó en punto de partida de una opción revolucionaria que durante más de una década no iba a ser explícitamente excluida de entre las alternativas legítimamente abiertas a la acción del cristiano en el mundo.

Esa apertura a una alternativa programáticamente revolucionaria, nueva en una institución que tradicionalmente había sido la más celosa y alarmada defensora del orden establecido, vino a sumarse a muchos otros signos del desfallecimiento de la voluntad de conservarlo frente a un desafío revolucionario que por su parte no se presentaba mucho más coherente, para hacer de la supuesta década de decisiones una de avances zigzagueantes y contradictorios por un camino que iba de la euforia colectiva inicialmente compartida aun por tantos que se sabían víctimas designadas de cualquier avance revolucionario, a los trágicos derrumbes que iban a marcar el decenio siguiente.

Éstos sólo iban a darse por otra parte cuando ya habían comenzado a multiplicarse los signos del agotamiento de esa gran ola ascendente que por décadas había arrastrado por igual al mundo desarrollado y al socialista; el más dramático de esos signos fue desde luego el ofrecido por las enigmáticas tormentas de 1968, que estallaron desde Praga hasta París, México y aun no pocos centros universitarios de los Estados Unidos. Aunque todas ellas surgían de contextos muy diversos y agitaban reivindicaciones tan variadas como esos contextos mismos, no por eso dejaban de reflejar por igual la impaciencia ante la sospechosa demora ené. Desencadenamiento de las transformaciones radicales anunciadas con fe tan firme a comienzos de la década. A la luz de esos relámpagos que cruzaban un cielo hasta entonces monótonamente sereno pareció columbrarse por un instante la extrema fragilidad de sistemas político-sociales que habían parecido hasta la víspera solidísimos.

Porque parecían anunciar el fin de la larga consolidación política del mundo desarrollado, los movimientos de 1968, junto con la Revolución Cultural china, ese misterioso estallido en el cual las fuerzas contestatarias querían leer también un presagio favorable, vinieron por un momento a revitalizar en toda América latina las esperanzas revolucionarias; retrospectivamente se advierte que anunciaban por el contrario el comienzo de su curva descendente, y ello no sólo porque todos los sistemas cuestionados se mostraron capaces de sobrevivir al tumultuoso desafío de 1968. Paradójicamente, el hecho de que en ninguna parte el orden establecido lograra superarlos sin sufrir en su legitimidad

tampoco iba a fortificar a los enemigos del orden vigente en Latinoamérica, cuya legitimidad ya desde antes de esa fecha había aparecido excepcionalmente dudosa y endeble; la enseñanza que en cuanto a esto aportaba 1968 era al parecer que sobrevivir sin el resguardo de esa legitimidad era menos imposible de lo que se había creído. En cambio la mengua de legitimidad también sufrida por el sistema rival del que subtendía el orden establecido en Latinoamérica suponía una pérdida absoluta para las tendencias revolucionarias en el subcontinente; aunque éstas estaban lejos de identificarse con el “socialismo real” tal como se practicaba en la Europa del Este, su llamamiento perdía necesariamente mucho de su fuerza persuasiva desde el momento en que, mientras se iban revelando ilusorias las soluciones alternativas que por un instante habían parecido surgir frente a ese “socialismo real”, se tornaba radicalmente imposible reconocer en éste el esbozo, así fuese insoportablemente tosco, de un sistema económico-social cuya superioridad sobre el capitalista había parecido hasta la víspera reflejarse aun en ese retrato tan poco favorecido que de él ofrecía el bloque soviético.

El fin de ese largo verano que para la economía mundial fue la segunda posguerra iba a ser menos puntual y dramático que las tormentas que quebraron el esperanzado clima surgido en el punto más alto de esa larga bonanza: aun así la transición de la economía mundial a una etapa distinta estuvo marcada por algunos hitos significativos. Uno de ellos fue la inconvertibilidad del dólar en oro, decidida por el presidente Nixon en agosto de 1971, que vino a destruir el orden monetario mundial establecido en 1944 en los acuerdos de Bretón Woods precisamente sobre la base del oro y un dólar ligado a aquél por una paridad fija, en el que todos reconocían uno de los pilares que habían sostenido el orden económico de la segunda posguerra. La iniciativa de Nixon buscaba adaptarse a la pérdida del predominio abrumador que la economía norteamericana había conquistado al abrirse la posguerra, y transferir en lo que fuese posible las consecuencias negativas de esa pérdida a esos rivales europeos cuya expansión estaba transformando el equilibrio de fuerzas económicas en el mundo desarrollado. Dos años después, la primera crisis del petróleo vino por añadidura a poner en entredicho la relación entre ese mundo desarrollado y su periferia, tal como se había consolidado desde el fin de la guerra. Como es bien sabido, la crisis se desencadenó cuando los países árabes, que en 1967 habían introducido el bloqueo petrolero como arma indirecta contra Israel, sin consecuencias de bulto en cuanto al precio del mineral, lo introdujeron de nuevo en noviembre de 1973, y descubrieron de inmediato que, si la eficacia política de ese instrumento seguía siendo dudosa, su impacto sobre el precio mundial del petróleo estaba superando las más ambiciosas expectativas de los países exportadores.

Lo que creyeron descubrir fue en suma que uno de los supuestos de la relación necesariamente perdedora de la periferia productora de materias primas y el centro industrial parecía haber perdido su imperio; el deterioro secular de los términos de intercambio de esa periferia, que había sido uno de los grandes temas de Prebisch tanto como de las llamadas teorías de la dependencia, no aparece ya como una fatalidad ilevantable; luego de décadas de desbridada expansión económica en el centro industrial, la demanda siempre creciente de recursos primarios que no son al cabo infinitos comenzaba a ofrecer un arma inesperada a esa periferia cuyo papel principal era proveerlos.

He aquí dos novedades que autorizaban a concluir que se estaba viviendo ya en un nuevo clima económico, aunque no eran suficientes para definirlo; éstas introducían un corte tan nítido como el de 1960; y uno y otro corte vienen a acotar, desde el punto de vista del marco económico global, esa anunciada década de decisiones, que se cierra no porque las que en 1960 parecían inminentes hayan sido en efecto afrontadas, sino porque

se ha desvanecido la coyuntura mundial que hacía parecer a la vez urgente y posible afrontarlas.

No significa esto que al abrirse la década de 1970 Latinoamérica se encuentre todavía, en su economía o en su vida sociopolítica, en el mismo punto que diez años antes, pero sí que las transformaciones acumuladas en esos años llenos de cosas no podían ser vistas como otros tantos aspectos de una transición orientada hacia una meta definida; aparecían cada vez más, en cambio, como momentos de una marcha azarosa, cuyo rumbo permanecía hasta el fin imprevisible. De nuevo, el marco para seguir esa marcha, o más bien esas marchas paralelas y ocasionalmente entrelazadas, es el nacional.

En esta etapa hay una excepción para ello, que es desde luego Cuba, cuya revolución sigue siendo, gracias a sus vastas repercusiones, un hecho que excede resueltamente el marco nacional. Se ha visto cómo el gobierno de Kennedy lo advirtió así, y buscó centrar su respuesta al desafío revolucionario en el continente antes que en la isla. Pero si lo prefería así no era tan sólo porque reconocía en aquél un teatro más adecuado a la vastedad de sus ambiciones, sino sobre todo porque mantenía serias dudas sobre la posibilidad de resolver por la aniquilación del adversario el contencioso abierto por la instauración del régimen socialista en Cuba. Aunque esas dudas no le impidieron llevar a término el proyecto de invasión de la isla por desterrados apoyados, entrenados y armados por los Estados Unidos, que el de Eisenhower había dejado ya muy adelantado, limitaron el apoyo que brindó a la iniciativa. Ello vino a hacer aún más inevitable su fracaso; en abril de 1961 los exiliados así apoyados alcanzaron a establecer una cabecera de puente en Playa Girón, pero ello no provocó el irrefrenable alzamiento que habían esperado, sino una impresionante movilización política y militar de los vastos apoyos con que seguía contando la revolución; ya antes de que esa movilización tuviese tiempo de incidir en el desenlace, los incursotes habían sido derrotados en los combates que llamaron de Bahía de Cochinos.

El fracaso del ataque militar contra Cuba, costoso para el prestigio de los Estados Unidos en Latinoamérica y para el de la bisoña administración de Kennedy tanto en su país como entre los aliados de éste, eliminó por el momento la posibilidad de una nueva tentativa armada, pero no impidió a Washington desquitarse en enero del año siguiente en el terreno diplomático, imponiendo en la reunión de la OEA convocada en el balneario uruguayo de Punta del Este la separación de Cuba del organismo y la creación de un Comité Consultivo de Seguridad, en el que algunos veían el anticipo de un organismo regional de carácter militar destinado a afrontar a la Revolución cubana y sus eventuales ecos continentales. Aunque ninguno de los países mayores de Latinoamérica daba apoyo a la expulsión de Cuba, ésta alcanzó laboriosamente la necesaria mayoría de dos tercios; la distancia entre la reacción del areópago latinoamericano frente al nuevo desafío y la que había opuesto ocho años a la tímida disidencia guatemalteca revelaba hasta qué punto la Revolución cubana había puesto en crisis, si no la hegemonía estadounidense sobre Latinoamérica, sí por lo menos los mecanismos políticos e institucionales que ésta había sabido instrumentar en el pasado.

En octubre de ese mismo 1962, el gobierno de Washington denunciaba que la URSS estaba instalando bases para cohetes nucleares en territorio de su aliada antillana, y proclamaba un bloqueo marítimo de ésta, destinado a impedir el ingreso de nuevas armas ofensivas de origen soviético, y a cesar sólo cuando la URSS se comprometiese a desmantelar esas bases. La aceptación por Jruschov de lo que aparecía como un humillante ultimátum, recibida con apenas disimulada ira en La Habana, tuvo el paradójico efecto de consolidar aún más el régimen revolucionario, en cuanto Washington había debido ofrecer en contrapartida al retiro de los cohetes el compromiso de no patrocinar una nueva invasión contra la isla, y aunque iba a proseguir todavía por años organizando

incursiones de disidentes y otras acciones hostiles en territorio cubano, que contribuían a agravar una situación económica de suyo difícil, el ataque frontal a Cuba dejó de figurar entre las alternativas realmente disponibles para su política.

Aun así, la implacable hostilidad norteamericana seguía incidiendo de modo fuertemente negativo sobre la isla revolucionaria; tanto el bloqueo económico, que por casi una década conservó eficacia bastante para disminuir al mínimo los contactos entre la economía cubana y la del entero mundo capitalista, como la cuarentena diplomática, que en esa misma etapa aisló a Cuba del resto de Latinoamérica (la única excepción era México, pero su negativa a sumarse a la política de los Estados Unidos frente a Cuba reflejaba, más bien que el deseo de ofrecer alivio eficaz al cerco sufrido por ésta, el puntilloso cuidado con que la cancillería mexicana defiende su derecho a desarrollar una política exterior independiente de la de su vecino del Norte) seguían limitando duramente las opciones abiertas a la dirigencia revolucionaria, y alcanzaban efectos no menos duros en la experiencia cotidiana de cada cubano.

Sin duda, ese forzado aislamiento no impedía a la Cuba revolucionaria gravitar en el continente; para ello le bastaba con sobrevivir, ya que su negativa a borrarse del horizonte ante los estallidos de majestuosa cólera de la potencia hegemónica no podía a la larga dejar de afectar la disciplina panamericana, y a más corto plazo, al mostrar que lo que todos habían largamente creído imposible era con todo posible, daba nuevo aliento a las tendencias contestatarias y revolucionarias.

Es comprensible con todo que la nueva Cuba haya querido actuar también de modo menos indirecto en el teatro continental al cual la administración de Kennedy estaba decidida a vedarle el acceso, y si sólo ocasionalmente iba a llegar a la intervención directa (cuyo impacto estaba de todos modos limitado por la modestia de los recursos que La Habana podía reunir para tales empresas) no se privaba de unir la prédica al ejemplo para ofrecer a Latinoamérica un modelo de marcha al socialismo que se presentaba –a ratos en sordina, a ratos en tono abiertamente desafiante– como rival del que los partidos comunistas del continente habían venido proponiendo desde 1935, fundado este último en una táctica de alianzas y una estrategia gradualista, que relegaba la entrada en la etapa decisiva de esa marcha a un futuro indeterminado. De este modo, a la espera de desencadenar la ambiciosa revolución continental, Cuba lograba por lo menos introducir en Latinoamérica esa otra que un joven admirador reclutado por la revolución cubana en los medios intelectuales parisienses, Régis Debray, llamó en fórmula feliz <<revolución en la revolución>>. El foquismo (que creía descubrir el secreto del éxito de la Revolución cubana en su enquistamiento inicial en un foco militar periférico desde el cual por acción y por presencia aceleró la disgregación del orden vigente) fue la fórmula a través de la cual esa revolución se ofreció como modelo para la continental, pero ya antes de que alcanzara difusión el afortunado folleto de Debray se vieron surgir focos en más de una nación latinoamericana.

Esos focos contaban con el auspicio de la isla revolucionaria, y sus organizaciones, convertidos a la nueva estrategia por el ejemplo de Cuba, se habían a menudo adiestrados en ella en el arte de la guerra insurreccional. Pero sólo excepcionalmente ese auspicio iba a incluir aportes significativos de armas y otros recursos, y ello no sólo por la modestia de los que La Habana podía distraer con ese objetivo, y las dificultades para hacerlo llegar a los remotos focos de la futura revolución continental (que hizo que tanta parte de esos recursos se volcase sobre la comparativamente accesible Venezuela) sino por la expansión al continente afloraba entre los objetivos de la Revolución cubana sólo como respuesta ocasional a vicisitudes específicamente cubanas más que latinoamericanas (tanto en 1962-63 como en 1967-68 el acento puesto en la revolución continental reflejó sobre todo la impaciencia de esa revolución frente a las limitaciones

que imponía al proyecto de construcción del socialismo la estrechez del marco insular, y a las que le fijaba la deferencia debida a la Unión Soviética).

Sin duda el influjo cubano se hizo sentir todavía de otros modos sobre el continente: la isla rebelde, aislada políticamente de éste, estaba obsesivamente presente en él a través de la imaginación colectiva, y la imagen fuertemente estilizada que ésta acogía, gravitó decididamente en la renovación cultural e ideológica tan intensa en esos años; a lo largo de ellos el gobierno revolucionario utilizó con admirable habilidad las oportunidades que ello le abría, y mientras los premios literarios que ofrecía desde La Habana Casa de las Américas se convertían en el primer equivalente latinoamericano del premio Goncourt o el Pulitzer, los pósters de la revolución, que ofrecían puntual contrapunto a las innovaciones neoyorquinas de la era del *Pop-art*, se constituían en muy apreciado elemento decorativo en los ámbitos en que se celebraban los rituales del deshielo cultural en curso.

Tulio Halperín Donghi: "Una encrucijada decisiva y su herencia: Latinoamérica desde 1960" en *Historia contemporánea de América latina*, Alianza Editorial, Primera edición en "Área de conocimiento: Humanidades", Madrid, 1998, pp. 518-543.